



Revista Conflicto Social - Año 16 N° 29 - Enero a Junio de 2023

Crisis orgánica y anomia. La lucha contra el ajuste y los bonos en Entre Ríos en 2001¹

Organic crisis and anomie. The fight against adjustment and bonds in Entre Ríos in 2001

Alejo Mayor*

Recibido: 17 de marzo de 2023

Aceptado: 22 de junio de 2023

Resumen: El estallido social de diciembre de 2001 dejó al borde del nocaut a las políticas económicas de la convertibilidad y a la vez puso en tela de juicio aspectos relativos a la representación política. En Entre Ríos, la crisis se agudizó en el segundo semestre tras el ajuste del “déficit cero”, con salarios adeudados a trabajadores estatales y el recurso gubernamental de los bonos para pagarlos. En este artículo, nos proponemos abordar la resistencia al “déficit cero” en Entre Ríos, el proceso de implementación e impacto de los bonos federales y la dinámica conflictual en torno al mismo. ¿Cómo fue que se desarrolló el proceso de resistencia al “déficit cero” en Entre Ríos? ¿Cómo apareció el recurso de los bonos en el horizonte? ¿Cuál fue su recepción por parte de los trabajadores organizados y su impacto en el proceso de conflictividad? ¿Cuáles fueron las formas de lucha que se dieron en los sectores movilizados y de qué modo se organizaron?

Palabras clave: déficit cero, ajuste, trabajadores, anomia, crisis orgánica.

Abstract: The outbreak of December 2001 left convertibility on the brink of knockout, at the same time that it called into question aspects related to political representation. In Entre Ríos, the crisis worsened in the second semester after the adjustment of the “deficit cero”, with salaries owed to state workers and the government resorting to bonds to pay them. In this article, we intend to address the resistance to “deficit cero” in Entre Ríos, the implementation process and impact of “bonos federales” and the conflictual dynamics around it. How did the “deficit cero” resistance process develop in the province? How did the bond resource appear on the ho-

¹ Una versión preliminar de este trabajo fue presentada como ponencia en las XI Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata. Agradezco los comentarios que, en aquella ocasión, me realizara Juan Pedro Massano que fueron de gran utilidad para el desarrollo ulterior del trabajo.

* Grupo de Estudios Históricos sobre Clases y Conflictos Sociales en Entre Ríos, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Argentina. ORCID N° 0000-0003-2914-1651. lic.alejomayor@gmail.com

rizon, its reception by organized workers and its impact on the process of conflict? Which were the forms of struggle that the mobilized sectors took place and in what way were they organized?

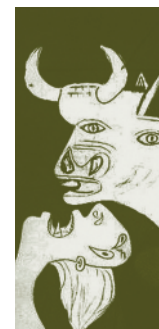
Keywords: deficit cero, adjustment, workers, anomie, organic crisis.

Introducción

La crisis orgánica (Gramsci, 2003)² que hizo eclosión en la Argentina en las jornadas de diciembre de 2001, como corolario del agotamiento del modelo de acumulación basado en la convertibilidad (Bonnet, 2015), conmocionó a la formación social argentina a lo largo y ancho del país (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2006). Sin embargo, salvo algunas excepciones (Gordillo, 2010; Román, 2010; Mayor, 2019; Gutiérrez y Ertola, 2021; Aiziczon, 2021), existen pocos estudios sobre el modo en que impactó y se desarrollaron las jornadas conflictivas en las realidades provinciales y/o locales, ya que la mayoría de los estudios se centraron en los sucesos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2003; Fradkin, 2002; Zibechi, 2003; Sartelli, 2007; Schuster et. al., 2005; Auyero, 2007; Bonnet, 2015 por mencionar algunos).

Por lo tanto, no proliferan estudios que aborden el análisis concreto de las realidades provinciales, la especificidad de la dinámica de sus acontecimientos, el despliegue de las particulares relaciones de fuerzas políticas en cada provincia, los sujetos sociales intervinientes, sus demandas y las acciones que llevan a cabo a partir del abordaje de los enfrentamientos concretos.

² Consideramos aquí a la crisis de la convertibilidad como crisis orgánica y seguimos, para ello, el concepto de Gramsci, en tanto crisis económica y política que se extiende en el tiempo y golpea al conjunto del régimen político, debido a la dificultad de la clase dominante y sus instituciones de construir consenso. Es, por tanto, una crisis de hegemonía.





La provincia de Entre Ríos no escapa a esta situación. En efecto, uno de los trabajos recientes más exhaustivos, que pasa revista a las situaciones provinciales en el proceso más general del cual diciembre constituye el punto de llegada, por caso, da cuenta de lo acontecido en Río Negro, Jujuy, Tucumán, Salta, San Juan, Mendoza, Chaco y Tierra del Fuego y omite el análisis de Entre Ríos (Cotarelo, 2016). Es de destacar que Entre Ríos fue una de las provincias con más víctimas fatales luego de distritos como CABA, zonas como el GBA y provincias como Santa Fe; y una de las primeras (un día después de Mendoza) donde comenzaron a registrarse saqueos (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2006).

El acontecimiento explosivo de los hechos de diciembre no debe oscurecer el carácter procesual de la crisis, cuyas causas se fueron desarrollando y desenvolviendo en el tiempo y que conformaron un verdadero polvorín que atravesó distintas etapas.

En dicho proceso, podemos atender a distintas temporalidades, desde aquellas de más largo alcance (que se remontan a las luchas contra las políticas “neoliberales” de los noventa), a las de mediano y más corto alcance (que atienden a distintas fases del proceso durante el año 2001). A su vez, como proceso complejo propio de una crisis orgánica, se atienden a múltiples dimensiones y aspectos, que en la realidad aparecen combinados y yuxtapuestos caleidoscópicamente, pero que podemos diferenciar en el plano analítico (crisis fiscal nacional –con especificidades provinciales–, crisis de representatividad política, conflicto interburgués, protestas sociales, etc.).

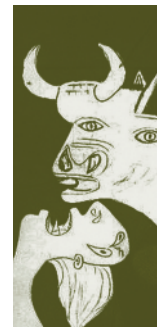
En este artículo nos proponemos abordar una dimensión de la crisis de 2001, y para ello, partimos de la resistencia al plan de ajuste del “déficit cero” en Entre Ríos: el proceso de implementación de los bonos federales en la provincia y la dinámica conflictual en torno al mismo. Nos centraremos en el análisis de las formas de acción y organización de los sujetos movilizados en la resistencia a dicho ajuste que implicaba el recorte sobre

salarios, jubilaciones y pensiones (amén de la bancarización obligatoria del pago de estas). Esto en el marco de una gran crisis económica y fiscal provincial, que implicaría, a corto plazo, el atraso salarial y el recurso del gobierno de Sergio Montiel (UCR. 1999-2003) al salvataje de los bonos federales para pagar salarios y jubilaciones. Consideramos que el combo de estos hechos contribuyó a la generación de una situación anómica³ en la provincia, caldo de cultivo de la irrupción de formas de violencia colectiva como los saqueos en diciembre. ¿Cómo fue que se desarrolló el proceso de resistencia al ajuste del “déficit cero” en la provincia de Entre Ríos? ¿Cómo apareció el recurso de los bonos en el horizonte del gobierno, su recepción de parte de los trabajadores organizados y el impacto de su implementación en el proceso de conflictividad? ¿Cuáles fueron las formas de lucha que se dieron los sectores movilizados y en qué modo se organizaron para la acción?

Para responder estas preguntas, nos valemos de una metodología cualitativa, para la cual, realizamos una reconstrucción histórica de tipo descriptivo en base al relevamiento de una fuente hemerográfica (*El Diario*, de la ciudad de Paraná). La ausencia de antecedentes sobre este proceso en particular, y sobre conflictividad en la historia reciente entrerriana en general, hacen necesario poner el énfasis en el aspecto descriptivo de la reconstrucción histórica. Sin embargo, no por ello renunciamos al intento de profundizar en dimensiones más analíticas, de modo de avanzar en una síntesis teórica de los hechos. Fundamentalmente, en la relación de los conceptos de anomia y crisis orgánica, y el modo en que se subjetivan de manera antagonista⁴ (Modonesi, 2010) las

³ El concepto de anomia de Durkheim aparece en dos de sus obras centrales: *La división del trabajo social* [1893] y *El suicidio* [1897]. Mientras que en esta última obra aparece principalmente como adjetivo para designar un tipo de suicidio (el suicidio anómico), en la primera da cuenta de situaciones de crisis en las cuales se produce una ausencia de normas que regulen los comportamientos sociales sin que puedan surgir nuevas normas lo que da lugar a comportamientos y relaciones “patológicas”. Es principalmente en esta acepción que la utilizamos aquí para dar cuenta de situaciones de crisis en las cuales se desarrollan conflictos y antagonismos sociales.

⁴ “Antagonismo” lo utilizamos aquí no meramente como sinónimo de conflicto o contradicción (en un sentido objetivo), sino en el sentido que lo recupera Massimo Modonesi (2010) de Toni Negri: como característica de la clase en lucha, como proceso de subjetivación política, como interiorización de la experiencia del conflicto. Modonesi desarrolla tres conceptos vinculados a procesos de subjetivación que considera homólogos, específicos y complementarios, según el tipo de relación que se observe y el tipo de experiencia forjada: subalter-





fuerzas sociales⁵ (Marín, 2009) en esos contextos. ¿De qué manera, en el marco de la desarticulación de las relaciones sociales producida, se generan condiciones de irrupción de una determinada subjetividad antagonista como la que se va construyendo en el proceso y detona en los días de diciembre?

El dinero, las relaciones sociales y la crisis

En todas las sociedades en las que predominan las relaciones sociales capitalistas, el dinero, en tanto equivalente universal del valor de las mercancías que contienen trabajo abstracto socialmente necesario para producirlo, no solo es un medio de cambio, sino, fundamentalmente, un articulador de esas mismas relaciones sociales. De Marx (2001) a Simmel (2013) mucho se ha escrito sobre el rol estructurante de lo social que cumple el dinero en las modernas sociedades capitalistas. Al tender a disolverse el valor de la moneda (o cuasimoneda en este caso) se generó una situación de dislocación social, de “mundo fuera de quicio” (al decir del príncipe Hamlet), que produjo una incertidumbre que tuvo las consecuencias explosivas que se manifestaron en diciembre.

A los trastornos producidos por el plan aguinaldo (que lo fraccionó en cinco), los salarios atrasados y luego el pago de estos en bonos, se sumó en diciembre el tristemente célebre “corralito” bancario que limitaba el movimiento del dinero depositado en bancos. La incertidumbre producida por la disolución del valor monetario disponible en grandes estratos de la población, tal y como ocurrió con la hiperinflación de 1989,

nidad (subjetivación vinculada a las relaciones de dominación y la experiencia de subordinación), antagonismo (subjetivación vinculada a las relaciones de conflicto y lucha y experiencia de insubordinación) y autonomía (subjetivación vinculada a las relaciones de liberación y experiencia de emancipación). Ver Modonesi (2010).
⁵ Consideramos que las clases sociales, en tanto relación social dinámica construida a partir de un proceso de lucha, no se enfrentan directamente sino constituidas en fuerzas sociales que expresan alianzas de clases y fracciones de clase. Ver Marín (2009).

se detonó sobre el Estado y su incapacidad de garantizar la normal reproducción de las relaciones sociales que el capitalismo requiere. Esto no implica, desde ya, que la crisis dineraria de la convertibilidad sea parangonable en términos de pérdida del valor del dinero con la hiperinflación y, por lo tanto, de una progresiva pérdida de sus funciones. Más bien sucedió lo contrario: la restricción de su circulación para las clases populares y medias con el objetivo de mantener su valor y funciones de acuerdo con el esquema convertible. A diferencia de 1989, no hubo devaluación del peso (austral en aquel caso), ni pérdida de función, reserva de valor ni de medio de intercambio. Los que sí se devaluaron fueron los bonos federales y se desarrolló una tendencia hacia la pérdida de ciertas funciones, al quedar restringido su uso para el intercambio. Como señala Eskenazi (2017), la ruptura de la unidad monetaria nacional se encontraba lejos de la disolución del dinero “con su implicancia como disolución del vínculo social general” (p. 175). Sin embargo, para el caso de Entre Ríos, consideramos que la combinación de factores producto del atraso salarial, a la implementación de los bonos y su rápida devaluación, y a las dificultades crecientes para poder colocarlos (que obturaba posibilidades de consumo e incluso el acceso a servicios básicos) generó enormes trastocamientos en las relaciones sociales, en parte, debidas a la pérdida parcial de regulación social que tiene el dinero como articulador de las mismas. En todo caso, y en función a las características fetichistas⁶ que asume el intercambio de mercancías, lo que aquí nos preocupa es el modo en que ante situaciones de crisis y conflicto se producen formas y dinámicas de subjetivación políticas a partir de la prácticas y experiencias de insubordinación (Modonesi, 2010).

Un concepto que puede sernos de utilidad para comprender este tipo de situaciones es el de anomia. Para Durkheim (1973) las situaciones

⁶ Marx denomina “fetichismo de la mercancía” al carácter misterioso que proviene de la propia forma de la mercancía. La metáfora, que remite al pensamiento mágico de algunas religiones “primitivas” que otorgaban propiedades sobrenaturales a objetos que vanagloriaban, es utilizada por Marx para dar cuenta del modo en que dicho carácter misterioso proyecta en los hombres el carácter social del trabajo como si fuese una particularidad propia de los objetos producidos. Las relaciones sociales entre humanos que producen con su trabajo las mercancías aparecen entonces como si fuesen relaciones sociales entre las cosas. Ver Marx (2001).





anómicas, características de las crisis económicas y los conflictos inmanentes a estas, se caracterizan por la falta de regulación social, es decir, cuando las normas que regulan las conductas dejan de ser válidas y no llegan aún a imponerse nuevas normas de conducta universalmente aceptadas. Esa situación de desorden es caldo de cultivo para la irrupción de acciones disruptivas, la emergencia de formas de violencia colectiva que se producen solo en esos contextos bien específicos, ya que su sostenimiento y regularidad en el tiempo son inaceptables para el orden social. Y es que la piedra de toque sobre la que se asienta el orden capitalista es el respeto sacrosanto a la propiedad privada. En estas sociedades, la moneda está dotada de un papel fundamental no solo como equivalente general para realizar el intercambio entre mercancías, sino como articulador fundamental de relaciones sociales. Al fracturarse una unidad monetaria nacional, al perder paulatinamente valor el bono federal, al clausurarse crecientemente la posibilidad de consumo (dadas las restricciones y dificultades de colocar los bonos en las relaciones de intercambio), se produjo una incertidumbre con consecuencias explosivas, de modo similar a la crisis de 1989 y la ola de saqueos que se produjo en aquella ocasión.⁷ Precisamente, en ese contexto, se presentaron los primeros piquetes y reclamos de vecinos de los barrios más pobres de Paraná que solicitaban alimentos frente a supermercados al grito de “queremos comer”.⁸ En ese sentido, consideramos que la noción durkheimiana de anomia aplicada a la situación concreta, es decir, de situación anómica, es solidaria de la conceptualización gramsciana de crisis orgánica. La incapacidad de la clase dominante erigida en poder estatal, de garantizar la reproducción social no solo de la clase trabajadora, sino de cada vez más fracciones de clases no proletarias urbanas y rurales, así como la situación de relaciones sociales desarticuladas, derivaron en una dificultad de construir consensos de

⁷ “[L]a muerte del dinero. Su virtual extinción como equivalente general y, junto con ella, de la operación de la ley del valor como reguladora del metabolismo social impuso un profundo proceso de disolución de las relaciones sociales” (Bonnet y Piva, 2009: 9).

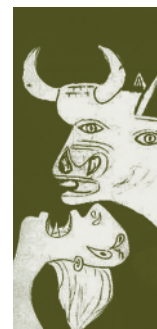
⁸ “En un marco de protesta, hubo trifulca entre grupos políticamente enfrentados”, 28/9/01.

dominación en los dominados y en la coerción como cuasi único recurso para sostener el orden en cuadro de insubordinación creciente. El “voto bronca” en las elecciones de octubre y el “que se vayan todos” fueron tal vez las expresiones más literales de la crisis de hegemonía del régimen.

De allí a una clave para comprender e interpretar los saqueos de diciembre, en los que una multitud de vecinos, familias, ocupados y desocupados, hambrientos y sin dinero (o con dinero desvalorizado) se pertrecharon de un criterio de justicia que priorizaba el alimento sobre la propiedad privada, aunque estuvieran en riesgo sus propias vidas (Mayor, 2019). Y allí el Estado apareció en su faceta puramente represiva, como pura coerción, incapaz de generar mecanismos de contención social y desbordado por la movilización. El resultado fue la muerte de tres jóvenes en las jornadas de diciembre.

Víctimas del vaciamiento: los noventa en Entre Ríos

Las profundas transformaciones producidas en los noventa, como corolario de políticas neoliberales que comenzaron a ensayarse desde la última dictadura cívico-militar, implicaron una transformación estructural de la sociedad argentina, que fue mutando su fisonomía de una sociedad con altos índices de integración social a una sociedad signada por la fragmentación y la heterogeneidad crecientes, con una enorme polarización y exclusión social hacia el ocaso del siglo. Este proceso de “modernización excluyente” (Barbeito y Lo Vuolo, 1992) en Entre Ríos implicó una “expansión económica con empobrecimiento social” (Rodríguez, Schunk y Riegelhaupt, 2019): mientras que entre 1993-1998 la economía entrerriana creció un 4,1% anual (por encima de la media nacional de 3,9%) y las exportaciones provinciales un 171% (media nacional de 102%), la desocupación creció un 33%, la pobreza un 40% y la desigualdad un 9,3%. La crisis hiperinflacionaria de 1989 operó en





todo el país como un trauma disciplinante sobre los sectores populares cuya reproducción social ya no podría efectuarse en el marco del modelo de acumulación orientado al mercado interno y la forma populista del Estado: “La coerción de la amenaza hiperinflacionaria se estableció (...) como fundamento para un amplio consenso alrededor de ese programa de reestructuración y recomposición del capital” (Bonnet y Piva, 2009: 10).

En el marco del programa de reformas estructurales de los primeros años de la administración menemista, la reestructuración capitalista contempló privatizaciones y concesiones de empresas públicas, desregulación económica y apertura comercial y financiera a capitales externos. El puntapié inicial a la pléyade de privatizaciones en la provincia se dio durante el último año de mandato de Jorge Pedro Busti (PJ, 1987-1991) con la privatización del histórico frigorífico de Santa Elena.⁹ La importancia de este hecho se manifestó con la presencia del presidente Menem en el paradigmático acto de traspaso. Fue en ese año ‘91 en el que se adoptó el modelo económico de la convertibilidad, cuyas primeras consecuencias de ajuste sobre el sector público debió cuerpear el empresario local Mario Moine (PJ, 1991-1995) quién sucedió a Busti en diciembre de aquel año.

La convertibilidad “encorsetó” las finanzas públicas provinciales mediante restricciones a la banca estatal y cooperativa lo que provocó el cierre del Banco Municipal de Paraná y la privatización del Banco Entre Ríos. El Estado provincial pasó a ser responsable de los servicios públicos de educación y salud, derivados desde la órbita de Nación sin los correspondientes recursos (económicos y de infraestructura) en el marco del proceso “descentralizador” de la reforma del Estado. El sector público provincial también fue afectado por el proceso privatizador que se impuso en todo el territorio nacional al privatizarse la Empresa de Gas de Entre

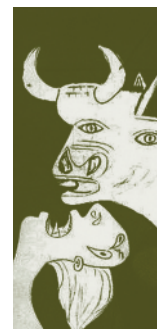
⁹ El frigorífico Santa Elena fue originalmente un saladero abierto en dicha localidad ubicado sobre la costa del río del Paraná por capitales ingleses en 1871. En torno suyo se organizó la localidad, la cual fue el modelo de “ciudad-fabrica”. En 1984 fue estatizado durante la primera gestión de Sergio Montiel. Luego de su privatización en 1991, cerraría sus puertas definitivamente en 1993 lo que dejaría un tendal de desocupados en la ciudad.

Ríos (Egaser), Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos (Epeer), el Banco de Entre Ríos, el frigorífico de Santa Elena, por nombrar algunos de los casos. A su vez, se firmaron pactos fiscales de cesión de coparticipación y de acotamiento del poder tributario provincial. Estas políticas fueron resistidas por los trabajadores que desplegaron acciones de protesta a este proceso.

Sin dudas, el punto de quiebre que marcó el inicio en la provincia del ciclo de resistencia trabajadora a estas políticas fue la masiva movilización del 21 de enero de 1993 en rechazo a la implementación de la Ley 8 706, que implicaba 2 605 despidos en la administración pública de un día para el otro, aunque preveía cerca de 10 000 en el plazo de un año. La respuesta desde el movimiento obrero marcó un punto de inflexión en el proceso de conflictividad entrerriano que sería un laboratorio de ensayo de algunas modalidades de organización y lucha que pertrecharán el repertorio de protesta del movimiento social provincial: centralmente, la organización de un amplio frente multisectorial¹⁰ dirigido por los sindicatos de trabajadores públicos y la movilización callejera como forma de acción predominante (Mayor, 2022).

Si bien la movilización de enero del 93 demostró la capacidad de reacción y organización de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de un amplio frente en rechazo a las políticas de ajuste y, efectivamente, logró ponerles un freno a los despidos, lejos estuvo de revertir el proceso que se venía produciendo nacionalmente. La resistencia de ATE ante los permanentes embates privatizadores y de expulsión de trabajadores del Estado alternó triunfos con derrotas. El gran saldo en materia de organización fue la puesta en pie de una Multisectorial, capitaneada por el

¹⁰ La “Asamblea en Defensa de Entre Ríos y su Pueblo” (popularmente conocida como la “Multisectorial”) estaba integrada por ATE (que impulsó su creación y la capitaneó) en estrecha alianza con el gremio docente Agmer, junto a otros sindicatos, organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, colegios profesionales, etc. “Fue la cristalización en una estructura organizativa de la fuerza social que se fue constituyendo en el enfrentamiento con el gobierno y los sectores que impulsaban la reestructuración del Estado. A pesar del carácter fundamentalmente policlasista de su composición y del carácter multisectorial del mismo, fue claramente la clase trabajadora organizada (en particular, los trabajadores dependientes del Estado, o sea, una fracción de la superpoblación relativa) y la organización sindical (su estructura, su tradición y sus metodologías de acción) las que tuvieron preeminencia a su interior” (Mayor, 2022:12)





gremio de los estatales, en alianza con los docentes de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), y con la participación de múltiples organizaciones gremiales, políticas, colegios profesionales, estudiantiles, etc. Esta organización policlasista fue la cristalización de la fuerza social (Marín, 2009) que se fue constituyendo en la lucha contra el ajuste y que, hacia 2001, incorporaría nuevas representaciones de clases y fracciones de clase (como pequeños y medianos empresarios, tanto urbanos como rurales, y trabajadores desocupados).

La lucha de los trabajadores pudo frenar la privatización de los casinos de la provincia, de la Línea Aérea de Entre Ríos –LAER– (se garantizó la continuidad laboral), de la Dirección Provincial de Telecomunicaciones, de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, servicios de limpieza, lavadero y cocina en los hospitales provinciales, y se impidió el desmantelamiento y privatización de Bromatología de la Provincia, entre otras. Sin embargo, no se logró revertir la tendencia general al desguace económico y social que se produjo en todo el país.

Estas luchas se dieron en un contexto de hegemonía neoliberal, en la cual la representación política no fue puesta en cuestión y, de hecho, el Partido Justicialista, que llevó a cabo las reformas tanto a nivel nacional como provincial, fue reelecto en ambos niveles en 1995. Dicha hegemonía comenzaría a resquebrajarse hacia finales de la década, al combinarse crisis económica con cuestionamientos políticos al menemismo, lo que favorecería el triunfo de la Alianza a nivel nacional y provincial en 1999.¹¹ Sin embargo, como dijimos, en la resistencia a estas políticas se fue conformando una fuerza social, subjetivada a partir de su carácter subalterno en las relaciones de dominación y la experiencia de la subordinación. Las acciones fueron centralmente defensivas, tendientes a resistir las consecuencias perjudiciales para los trabajadores de las

¹¹ “Una aproximación a la dimensión política de los conflictos provinciales evidencia (...) un cambio en la capacidad hegemónica del Estado, que tendió a mostrar desde 1997 crecientes dificultades en el ejercicio de sus funciones hegemónicas” (Piva, 2007: 53-54).

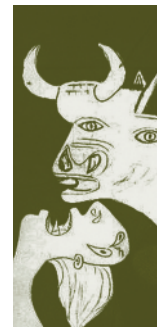
políticas neoliberales, sin introducir grietas en la dominación ni realizar cuestionamientos al “modelo” ni a la convertibilidad.

Un sendero minado de ajustes: los prolegómenos de la explosión

El segundo mandato de Sergio Montiel (1999-2003)¹² al frente del Ejecutivo Provincial comenzó, con respecto a los trabajadores estatales, con la misma tesitura del primero: signado por la confrontación. A poco de asumir, con el Decreto y posterior Ley 9 235, fueron despedidos 3 800 empleados públicos, lo que volvió a ubicar a ATE en el vórtice de la oposición trabajadora al nuevo gobierno. La lucha por la reincorporación de los despedidos fue una constante durante la segunda administración montielista y se libró en todos los planos, desde acciones de carácter administrativo-judicial (la vía jurídico-legal) a otras de carácter directo como la movilización callejera. Otro ataque directo al gremio de los estatales fue la decisión de eliminar por decreto la cuota sindical (*deja vú* de su primera gestión) a principios de 2000, actitud que debió retrotraer por fallo de la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2001. Durante este proceso volvió a tomar protagonismo la forma organizativa que había surgido al calor de la resistencia a los despidos masivos del gobierno de Moine: la multisectorial.

Los primeros meses de 2001 encontraron una miríada de conflictos diseminados por toda la provincia: docentes luchando por la devolución de los días descontados por huelga y el pago del Incentivo Docente, municipales de Concepción del Uruguay y choferes de colectivos en Paraná que reclamaban el aguinaldo, desocupados que realizaban acciones de protesta en Concepción del Uruguay, Gualguay, La Paz y

¹² Sergio Montiel fue el primer gobernador de Entre Ríos tras el retorno de la democracia en 1983, al cubrir el período 1983-1987.





Concordia, estatales que luchaban por la reincorporación de los despedidos. Es decir, conflictos mayoritariamente protagonizados (salvo la excepción de los choferes de colectivos) por trabajadores que constituyen “población sobrante” para las necesidades inmediatas del capital o “superpoblación relativa” (Marx, 2001).¹³

A todo esto, Montiel se enfrascaba en un intento de reforma constitucional provincial, totalmente fuera de *tempo* político que, previsiblemente, naufragaría en un contexto inviable para este tipo de empresa¹⁴. Los consensos políticos necesarios para encarar la reforma, en el contexto de crisis orgánica, fueron imposibles de construir para el gobierno, cuya propuesta fue rechazada por todo el arco político partidario (incluso de los aliados al radicalismo en la Alianza).

La designación de López Murphy como ministro de Economía de la Nación implicó una profundización del ajuste, con un gran recorte del gasto público (postulaba reducir el presupuesto nacional en 2 mil millones para el año 2001 y 2,5 mil millones para el siguiente). Las áreas de educación, salud, asistencia social y las transferencias a las provincias las más afectadas. Por otro lado, en el Pacto Federal suscrito entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, este último se comprometió a

¹³ “La desocupación, aunque es la manifestación más evidente de la superpoblación relativa, lejos está de ser la única: ella también aparece (...) en una parte de la población ocupada: una parte de la población rural, una parte de los trabajadores de la administración del aparato estatal tanto nacional como provinciales y municipales (cuya condición de sobrantes para el capital se hace evidente en los discursos de los cuadros intelectuales del gran capital), una parte de la población “autoempleada” (...) en condiciones de trabajo precario y otras manifestaciones en ramas o actividades de condiciones productivas obsoletas” (Iñigo Carrera, 2018:23). La consideración de algunos docentes como miembros de una de las modalidades de la superpoblación relativa, específicamente la latente (en tanto parte del empleo estatal excluida del proceso de valorización del capital) es problemática y su análisis excede los marcos del actual trabajo. Lo aquí nos interesa remarcar es que en este momento los docentes movilizados son fundamentalmente aquellos que tienen como empleador al Estado.

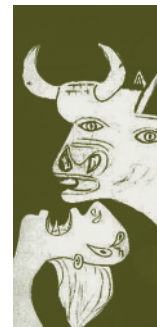
¹⁴ En los primeros días de enero de 2001 Montiel remitió al Senado el proyecto de reforma de la constitución provincial. De prosperar la iniciativa, las elecciones para definir los 45 convencionales titulares y 15 suplentes para la reforma, debía llevarse a cabo el 8 de abril, junto a la de diputados y senadores nacionales (“Proponen que el 8 de abril se elija los convencionales” 4/1/01). El exgobernador y principal referente de la oposición, Busti (con mayoría en ambas cámaras) sostuvo que el planteo de la reforma en un contexto de “caos social” como el que existía en la provincia, era un “disparate, un dislate absoluto” (“Busti: la reforma es un ‘disparate absoluto’” 4/1/01). Desde el sector del PJ encabezado por Augusto Alasino (implicado en el caso de las coimas en el senado), el que mejor diálogo tenía con el oficialismo, coincidieron en que no estaban dadas las condiciones (“Aseguran que el justicialismo no acompañará el proyecto”, 5/1/01). El Frepaso, socio de la UCR en la coalición gobernante, también la desestimó por considerarla un proyecto personal del gobernador (“No es un proyecto de la Alianza”, 6/1/01) e insensata en función de los tiempos que estaban planteados (“Con más tiempo”, 6/01/01).

congelar el gasto primario (salarios, salud, educación, etc.) por cinco años. Estas políticas, conjuntamente a los despidos producidos en la delegación local del PAMI, suscitaron el rechazo de ATE (que se encontraba en estado de alerta y movilización) y de la CGT regional y sus primeras movilizaciones en el año.

Pero la asunción de López Murphy no solo concitó el rechazo de los sindicatos estatales, sino también del mismo gobierno provincial. Tras el anuncio del ajuste, Montiel (quién había sostenido que el ajuste debía acotarse a la nación) se distanció del gobierno nacional, preocupado por la magnitud del recorte para Entre Ríos. “Esto que se ha hecho ahora no ayuda a nadie porque no facilita la resolución de muchos conflictos”,¹⁵ sostuvo el gobernador. A su vez, declaró que el ajuste perjudicaba notoriamente a la provincia ya que implicaba afectaciones a lo presupuestado en planes sociales y obras públicas de entre 5 y 6 millones de pesos al mes. Se acabaron los tiempos de la buena relación y se inició un camino de tire y afloje entre el gobernador y el Ejecutivo Nacional a través de declaraciones cruzadas sobre el modo de implementar el ajuste en la provincia. No se trató de un rechazo al ajuste en sí, sino a su implementación, ya que implicaba nuevas responsabilidades financieras para las alicaídas arcas del gobierno provincial, como el financiamiento del Fondo de Incentivo Docente, dada la eliminación de partidas anuales de 660 millones que Nación giraba a provincias en ese concepto (Zícari, 218:223).

El ajuste (el quinto desde la asunción de la Alianza) fue rechazado por todo el arco sindical. La novedad consistió en que a los paros y movilizaciones anunciados por ATE y la CGT de Moyano se adhirieron la totalidad de los gremios docentes (Agmer, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica –AMET–, Unión Docentes Argentinos –UDA–, Sindicato Argentino de Docentes Particulares –Sadop–, Asociación Gremial de Docentes Universitarios –AGDU–); los estudiantes univer-sitarios

¹⁵ “Montiel: el ajuste perjudica ‘notoriamente’ a la provincia”, 19/3/01.





(organizados en torno a la Federación Universitaria de Entre Ríos –FUER–); trabajadores desocupados organizados en la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y jubilados agrupados en el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP). De esta manera, podemos observar cómo en los enfrentamientos se fue construyendo una fuerza social capaz de articular intereses que trascienden lo económico-corporativo. El ajuste anunciado por López Murphy, en ese sentido, implicó un salto cualitativo en la unidad de sectores que venían luchando de manera aislada por sus propios reclamos. Inclusive, sectores organizados de desocupados y jubilados, que hasta aquí se habían manifestado en reclamo por más Planes Trabajar, articularon sus acciones con otros sectores en rechazo al ajuste.¹⁶

La participación de los estudiantes y docentes universitarios ensanchó el arco de alianzas de clases y fracciones de clases de la fuerza social en conformación. El recorte propuesto afectaba de manera especialmente dura a la universidad: alcanzaba el 20% del presupuesto (casi 5 millones menos) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el 85% del mismo se destinaba al pago de salarios.¹⁷ En consecuencia, la comunidad universitaria desplegó un importante plan de lucha consistente en paros, cortes de la ruta 11 a la altura de Oro Verde¹⁸ y clases públicas, entre otras medidas.

En este período, se manifestaron ya signos de crisis de hegemonía, observables en la dificultad de construcción de consensos del gobierno provincial, incluso al interior de la coalición gobernante, así como en las grietas entre el gobierno provincial y el nacional sobre el plan de ajuste. La magnitud del ajuste anunciado ensanchó las bases sociales de la

¹⁶ La CCC y el MIJP, son dos corrientes que se encuentran orientadas políticamente por el Partido Comunista Revolucionario (PCR). De allí a su articulación en reclamos como la demanda de Planes Trabajar, aunque no constituya una demanda específica del sector de los jubilados.

¹⁷ “La poda le quitará el 20% del presupuesto a la UNER”, 18/3/01.

¹⁸ Oro Verde es una pequeña localidad ubicada a 10 km de la capital provincial, Paraná, que tiene la característica de contar con sedes de las dos universidades públicas de la provincia: UNER (nacional) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Esta última, de carácter provincial, fundada el 8 de junio de 2000. Debido a esta presencia y al peso que adquiere la población estudiantil en la localidad, se la conoce como “Ciudad Universitaria”.

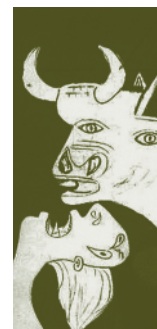
alianza de la fuerza social en constitución (fundamentalmente estudiantes y docentes universitarios), cuyas acciones siguieron planteándose en el plano de la resistencia y en tanto subalternos.

La lucha contra el déficit cero y el fantasma de los bonos

Tras el repudio popular a las medidas de ajuste, López Murphy fue eyectado de su cargo y el Senado aprobó los superpoderes a Cavallo, quien ya había recibido el rechazo de Montiel antes de asumir y criticó su designación. El gobernador entrerriano, en este aspecto, se diferenció de la mayoría de los gobernadores (tanto del PJ como de la UCR) que respaldaron el ascenso del nuevo ministro (Zícari, 2018).¹⁹ El retorno de Cavallo vino de la mano de un nuevo recorte: el paquete de medidas conocido como “déficit cero”. Este ajuste (el séptimo en 19 meses de gestión aliancista), anunciado el 9 de julio, fue el más grande de todos hasta el momento (un 50% mayor que el que intentó realizar López Murphy en marzo) (Zícari, 2018: 274).

Las nuevas medidas implicaban recortes sobre salarios, jubilaciones y pensiones, amén de la bancarización obligatoria para el pago de estos. Cavallo, a su vez, señaló que el ajuste debían realizarlo las provincias. El aumento de la conflictividad que a partir de estas medidas se fue dando en la provincia estuvo en consonancia con el proceso general a nivel país. Como señala Piva (2009), desde el mes de junio se produjo un fuerte aumento de los conflictos de estatales, impulsados por la política del déficit cero.

¹⁹ “Todos aquellos que habían sido claves en la caída de López Murphy (...) lo respaldaron [a Cavallo], incluso Alfonsín (...) señaló que las primeras medidas de Cavallo ‘van por el buen camino’ (...) Los gobernadores, tanto del PJ como de la UCR también lo recibieron con aplausos” (Zicari, 2018: 231). No fue el caso de Sergio Montiel.





En el caso de Entre Ríos, el ministro de Hacienda Cepeda sostuvo que el déficit en la provincia ascendía a los 180 millones de pesos, de los cuales 100 millones correspondían a intereses. Frente a este panorama, para Edgardo Massarotti, secretario general de ATE y referente de la Multisectorial, el único camino era “voltar a Cavallo”.²⁰ Desde Agmer, por su parte, su secretaria general Beatriz Montaldo sostuvo que el “déficit cero” se obtendría “del ajuste a los trabajadores”.²¹

Los meses sin cobrar de los agentes del Estado se fueron acumulando hasta llegar a totalizar los tres meses sin percibir los haberes hacia fin de año. La situación sanitaria de la provincia no ofrecía un panorama mejor: falta de partidas, de insumos, con trabajadores sin cobrar y una obra social al borde del colapso. En el norte de la provincia (sobre la costa del río Uruguay), con centro en Chajarí, se fueron organizando los productores agropecuarios (citrícolas principalmente y arroceros en menor medida) quienes montaron en aquella localidad una carpa que duró más de 100 días y realizó numerosos cortes de la ruta 14.

Ante la profundización de la crisis nacional y provincial, con una gran recesión en la industria y caída del producto bruto interno,²² desde mediados de junio empezó a discutirse públicamente la política de emisión de bonos en la provincia.²³ La necesidad de los bonos venía dada por las restricciones que el esquema de la convertibilidad imponía al circulante, dado a la relación de este con las reservas y el sostenimiento del tipo de cambio. Fue por ello que, en este contexto y en el marco de estas restricciones, el gobierno nacional, y el de muchas provincias, recurrieron crecientemente a las cuasimonedas para financiar los desequilibrios fiscales (Schvarzer y Finkelstein, 2003).

²⁰ “El déficit de la provincia llega a 180 millones de pesos, reconoció Cepeda”, 13/7/01.

²¹ “Por el retraso salarial los maestros paran dos horas”, 13/7/01.

²² “La producción industrial cayó todos los meses en los que estuvo en vigencia el déficit cero, con tasas entre 4,5% en julio y 12% en septiembre, respecto a los mismos meses del año 2000; en el tercer trimestre, el producto bruto interno cayó un 4,9%, empujado tanto por la caída de la producción de bienes como de los servicios (datos del INDEC)” (Salvia, 2007: 217).

²³ “[A] medida que avanzaba la crisis y el proceso de fuga de capitales, se produjo un proceso de desmonetización de la economía que se verificó como una caída del circulante y los depósitos en cuenta corriente y en cajas de ahorro desde 1998, que se aceleró fuertemente durante 2001” (Eskenazi, 2007: 174).

La posición del gobierno provincial con respecto a estas medidas fue de alineamiento con Nación. Montiel, que se había manifestado desde marzo como opositor al interior de la Alianza a Cavallo, realizó una defensa de sus medidas económicas.

El rumor de la emisión de los bonos generó un enorme y pronunciado rechazo desde el primer momento por parte del movimiento sindical, reticente a la posibilidad de percibir sus salarios en cuasi-monedas. Desde ATE realizaron asambleas, y rechazaron fuertemente tanto el nuevo plan de ajuste del gobierno nacional como el pago de salarios con bonos por el cual “todos los sectores ligados al mercado interno nos vamos a ver muy afectados”,²⁴ en tanto los docentes pararon por el retraso salarial. Los estudiantes, desde la Federación Universitaria de Entre Ríos (FUER), también rechazaron las medidas económicas del gobierno como “inviabiles desde todo punto de vista”.²⁵ Los docentes de la seccional Paraná de Agmer se movilizaron por la falta de pago del salario, el aguinaldo y el incentivo docente y no descartaron volver a reinstalar la Carpa Blanca de la Dignidad²⁶. Tras declararse en estado de alerta y movilización, dispusieron concentrarse todos los días al mediodía frente a la sede de la seccional y de allí marchar hacia la Casa de Gobierno hasta tanto se liquidara lo adeudado. Asimismo, se anunció una concentración en la localidad de Oro Verde y una protesta sobre la ruta 11 para explicar a la población los motivos de la medida de fuerza. Sobre los docentes que deben viajar para trabajar se les recomendó que presenten el telegrama obrero.²⁷

²⁴ “Por el retraso salarial, los maestros paran dos horas”, 13/7/01.

²⁵ “Por el retraso salarial, los maestros paran dos horas”, 13/7/01.

²⁶ ¿Vuelve la Carpa Blanca?, 12/7/01.

²⁷ El telegrama obrero, dirigido al Consejo General de Educación (CGE), informaba de la imposibilidad económica de pago del medio de transporte necesario para dirigirse a la institución escolar donde se trabajaba, por lo que, a fin de cumplir con el débito laboral, el docente cumpliría horarios en la institución escolar más próxima a su domicilio. Sin embargo, ante la negativa del CGE, en muchos casos, de aceptar el telegrama obrero a aquellos docentes que ante los atrasos salariales y la no aceptación de ellos a los bonos federales como medio de pago para el transporte, Agmer envió notas según ley de trámites administrativos (Agmer, 2001).





También protestaron por falta de pago los docentes técnicos de AMET: se declararon en estado de alerta y asamblea permanente y realizaron retención de servicios en los últimos módulos.²⁸

Los judiciales organizados en la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), por su parte, también realizaron retenciones de una hora en protesta por el atraso en los pagos y declararon que continuarían con estas medidas hasta tanto no se liquide el salario de junio.²⁹

El repudio al ajuste del déficit cero, a la implementación de los bonos y la lucha por los pagos adeudados fueron las tres demandas que se articularon en la multisectorial, que protagonizó movilizaciones semanales a la Casa Gris (nombre con el que se conoce la Casa de Gobierno de Entre Ríos) durante el segundo semestre de 2001. Estas acciones fueron incrementando su nivel de confrontación. Además de los frecuentes cortes, quemas de cubiertas, pirotecnia, proyectiles contra la Casa de Gobierno (naranjas, huevos, piedras, e incluso, basura) y un despliegue teatral en las movilizaciones (muñecos, murgas, disfraces, ataúdes, etc.); se fue intensificando el fuego verbal cruzado con el gobernador (Massarotti va a dirigirse al gobernador como “gorila”³⁰, “terrorista”³¹, “hijo de puta”³², “negro capanga”³³, entre otros poco amistosos epítetos). También se produjeron algunos enfrentamientos ante el intento del gobierno de vallar y generar una zona de exclusión en torno a la Casa de Gobierno.

La situación en las localidades del interior de la provincia también se fue espesando. Más allá de lo antedicho en Chajarí, se registraron cortes de ruta y movilizaciones de empleados municipales, docentes y desocupados en Alcaraz, Santa Elena, Concordia, Gualeguay y Concepción del Uruguay.

²⁸ “Medidas de AMET por falta de pagos”, 12/7/01.

²⁹ “El atraso salarial en el Estado provincial genera protestas”, 12/7/01.

³⁰ “Los gremios estatales refutaron al gobernador”, 3/7/01.

³¹ “Marcha contra los bonos y la política provincial”, 26/9/01.

³² “Naranjazos y huevazos marcaron la forma de protesta de estatales”, 27/9/01.

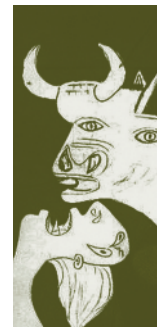
³³ “Marcha contra los bonos y la política provincial”, 26/9/01.

Sin embargo, más allá del despliegue de estas acciones a lo largo y ancho de la provincia, el recurso a los bonos ya era un hecho. Dicha medida, que concitó un enérgico rechazo de todo el arco sindical desde el primer momento, se fue imponiendo hasta forzar su aceptación tras el desgaste propio de una crisis que ponía en jaque la cuestión de la reproducción social de cada vez más amplios sectores de la población. Los meses sin cobrar de los agentes estatales (provinciales, municipales, docentes, de la legislatura, judiciales) que se fueron acumulando, el sistema sanitario que orillaba el colapso y la situación social en permanente deterioro preanunciaban la posibilidad de situaciones explosivas.

La fuerza social que se fue constituyendo, expresada en la multisectorial, fue ampliando su base social, esta vez incorporándose sectores de la pequeña y mediana burguesía rural. Las acciones, a su vez, comenzaron a ser más radicales y mostrar mayor grado de antagonismo. La falta de cobro y la perspectiva de la emisión de bonos, sumados a la crisis política del gobierno de Montiel, mostraban signos de desregulación social y anomia creciente.

Llegando los bonos

La implementación de los bonos no se dio de un día para el otro. Para tratar de impedir la aprobación de los bonos, los trabajadores nucleados en la Multisectorial se movilizaron hacia la legislatura en varias ocasiones. El 14 de julio, por ejemplo, con presencia de trabajadores de ATE y Agmer con banderas y consignas en contra del pago de bonos, se levantó la sesión de diputados en la que debían tratarse las medidas anticrisis, ya que los diputados del PJ no dieron el *quorum* y alegaron, para ello, que no habían recibido las iniciativas del gobierno para superar la crisis financiera. A partir de allí, las sesiones para debatir estas medidas





se suspenderían sistemáticamente durante más de diez días consecutivos por falta de *quorum*. También apelaron a la creatividad y el humor, como cuando repartieron los “bonos ya emitidos”: los *bocondeser* –“Bonos de consolidación del despilfarro en Entre Ríos”–.³⁴ Los trabajadores, mediante este artilugio discursivo, buscaron contrastar las políticas de austeridad del gobierno para con ellos con lo que denominaban una política de “despilfarro” de los fondos públicos en referencia a medidas como la compra del Hotel Mayorazgo (un hotel cinco estrellas en quiebra) y del Tango 04 para LAER (la empresa aeronáutica provincial). Este argumento del “despilfarro”, de alguna manera, puede pensarse como una suerte de consenso del ajuste, o un reconocimiento tácito de la necesidad de este ante la crisis fiscal, por lo que los trabajadores, antes que rechazarlo en plano, criticaban que su orientación vaya dirigida contra los trabajadores y no contra otras áreas del gasto estatal.

Ante las movilizaciones hacia la legislatura donde se empezaban a debatir las medidas sobre el gasto público, el gobierno respondió con la prohibición del ingreso a la Casa de Gobierno (al interior de la cual se encuentra la Legislatura Provincial), lo que motivó una denuncia al gobernador de ATE frente a la justicia por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.³⁵

El 18 de julio se produjo un importante paro de estatales contra el ajuste de los gobiernos nacional y provincial, con movilización hacia la Casa de Gobierno bajo la consigna “Basta de ajuste sobre los que menos tienen”.³⁶ Estatales provinciales coordinaron el paro con trabajadores de organismos nacionales y expresaron un alto grado de unidad. Agmer y AJER, en tanto, realizaron un acompañamiento “simbólico” por encontrarse sus respectivas actividades en receso. También convocaron Asociación Bancaria, los gremios que agrupan a trabajadores de INTA, PAMI, AFIP, el sindicato de los viales nacionales, Personal Civil de las Fuerzas Arma-

³⁴ “ATE volvió ayer a la Legislatura y anuncia medidas”, 16/7/01.

³⁵ “ATE fue a la Justicia por el cierre de Casa de Gobierno”, 18/7/01.

³⁶ “Desde las diez, paran los estatales contra los ajustes económicos”, 18/7/01.

das, Sindicato de Dragado y Balizamiento y la Unión de Docentes Argentinos. UPCN, por su parte, realizó paros de una hora por turno, con asamblea en los lugares de trabajo.

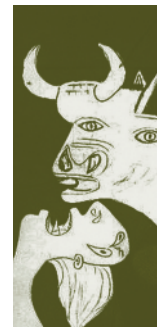
Al momento del lanzamiento del déficit cero, la provincia ya era un hervidero: estatales, docentes, judiciales, desocupados, estudiantes, productores agropecuarios se encontraban movilizados por distintas demandas. Y a los bonos se le sumó otra cuestión candente: el aguinaldo. Ante la bancarrota del Estado Provincial, el gobierno decidió fraccionar el pago del aguinaldo en seis cuotas. De acuerdo con lo que planteaba el decreto del 6 de julio (dado a conocer dos semanas después) cuando hubiese fondos, estos serían transferidos para el cobro de la primera de las seis cuotas.³⁷ Esta medida tomó por sorpresa a los trabajadores del Estado, desde cuyos principales sindicatos se cuestionó al señalarse que se trataba de “otro golpe a los bolsillos de los trabajadores”³⁸. Para vehicular este pago se lanzó el “Plan Aguinaldo” mediante el cual se iba a poder utilizar lo abonado, depositado en una tarjeta creada por el gobierno denominada Sidecreer (“Sistema de Crédito de Entre Ríos”),³⁹ en comercios adheridos, que resultaron ser muy pocos. Al fraccionamiento del aguinaldo se le sumaba así la dificultad para poder utilizarlo para el consumo. Debido a los escasos locales adheridos, dada la incertidumbre que un gobierno en quiebra generaba en el sector comercial, se fueron formando importantes filas de personas en las puertas de estos. Inclusive, se produjeron algunos hechos curiosos como el de un autoservicio de El Pingo, una pequeña localidad del departamento Paraná de un millar de habitantes, que al adherirse al plan (sin poner tope en los montos de venta) recibió clientes de todas las localidades cercanas, algunos que recorrieron la distancia de hasta 65 km para comprar en el local.⁴⁰

³⁷ “El Gobierno pagará el medio aguinaldo en seis cuotas”, 22/7/01.

³⁸ “Para los sindicalistas, es otro golpe a la economía doméstica”, 23/7/01.

³⁹ El Sidecreer fue creado el 11 de mayo de 2000 como un sistema financiero sin intermediación para empleados y jubilados de la administración pública provincial y municipal. El capital para su conformación provino de dos entes autárquicos de la provincia: el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (lafas) en un 98% y el 2% restante del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (lapser).

⁴⁰ “La gente viaja hasta 65 km para poder usar el aguinaldo”, 29/10/01.





Finalmente, se aprobó la emisión de los bonos, tras numerosas movilizaciones a la Legislatura Provincial tratando de impedirlo, y su posterior implementación para abonar salarios (que alcanzaron los tres meses de atraso). El recurso tan resistido fue finalmente aceptado con resignación por los trabajadores, ante la necesidad de garantizar su reproducción social. El atraso salarial actuó de manera disciplinadora. El valor de la cuasimoneda, cuyo billete llevaba el rostro del caudillo Justo José de Urquiza, se había planteado en paridad al peso y llevó por denominación “Bono Federal”.

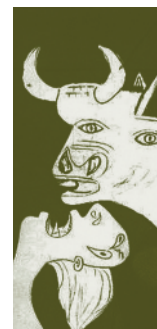
La situación de la paridad peso-bono, en poco tiempo se mostró reñida con la realidad: no existía el consenso con los comerciantes y empresarios (principalmente los pequeños y medianos) para sostenerla. Tal y como había sucedido con el aguinaldo, no todos los comercios aceptaban los bonos, y muchos de los que lo hacían aplicaban recargos. Por lo que la bonificación de los salarios, tal y como había sido denunciado por los sindicatos, implicó una devaluación (poco) encubierta. También se sumaba otra dificultad y era que los servicios privatizados (como el gas, la electricidad, la telefonía) se debían abonar en pesos, por lo que muchos comerciantes sostenían la inviabilidad de sus negocios si ellos debían recibir los bonos de los clientes, pero sostener sus negocios en pesos. De hecho, algunos comerciantes, y fundamentalmente los representados en Apyme (que nucleaba pequeños y medianos empresarios) empezaron a confluir más en las protestas de la Multisectorial con sus propias demandas. La alianza y las fracciones de clases de esa fuerza social expresada en la Multisectorial se ampliaba en relación a su constitución original al calor de las luchas contra el ajuste de los noventa, al incorporar nuevos sectores amenazados por la crisis. La clase dominante iba perdiendo, al ritmo de la crisis, la capacidad de generar consensos en torno a la reproducción del modelo de acumulación en cada vez más sectores de la sociedad.

La aparición y extensión de los bonos cambió el panorama social al dislocar relaciones y producir nuevas rearticulaciones en un contexto

agobiante y caótico. Proliferaron los “arbolitos”: personas particulares que realizaban la operación cambiaria (al devaluarse el valor del federal) en la peatonal de manera ilegal. El cobrar en una moneda que solo se podía consumir en la misma provincia también generó trastornos en organizaciones familiares que debían realizar movimientos en otros sitios del país, por lo cual, debían recurrir a todo tipo de estrategias de supervivencia a través de sus redes de contención. Sin embargo, no todos los empresarios corrían la misma suerte: se hablaba del acceso privilegiado de algunos empresarios cercanos al gobierno a la Caja de Conversión, mediante el cual cambiaban los bonos que recibían por pesos. Llegó, incluso, a extenderse una forma precapitalista de intercambio de mercancías: el trueque. Sus adherentes se contaron por miles solo en la ciudad de Paraná.⁴¹

En este momento, la situación anómica que se fue generando de la mano del desbarajuste económico que produjeron los bonos, la falta de pagos y el plan aguinaldo, se dio en un contexto de crisis orgánica, tanto a nivel provincial como nacional (y replicada en cada localidad). La situación abierta posteriormente a las elecciones de octubre expresó una crisis de representatividad política que se combinó con la crisis económica. En ese marco, tanto el gobierno nacional como el provincial, fueron incapaces de construir los consensos en torno a la dominación, de construir hegemonía y plantearse como dirección del conjunto de clases y fracciones de clases, la mayoría de las cuáles no veía garantizadas las condiciones de su reproducción social. La fuerza social que enfrentó estas políticas en la provincia (que sumó fracciones de clase como la pequeña burguesía comercial a su alianza) demostró un mayor grado de insubordinación y antagonismo, exigiendo cambios profundos, tanto a nivel económico como político.

⁴¹ En el mes de junio tres barrios paranaenses (Gaucha Rivero, Gobernadores y Arenales-Toma Nueva) se sumaron al Club de Trueque, que creció notablemente luego del impacto del ajuste del déficit cero. Para profundizar sobre el trueque, temática que excede los objetivos de la presente ponencia, ver Hintze (2003).





Palabras finales

El ajuste conocido como “déficit cero” concitó el enérgico rechazo de parte de los trabajadores estatales organizados sindicalmente, quienes se movilizaron desde un primer momento contra estas medidas. El incremento de las acciones conflictivas fue considerable a partir de este momento e irían aumentando en frecuencia desde aquí hasta diciembre, en consonancia con el proceso conflictivo a nivel nacional. Sin embargo, la dinámica provincial del proceso tuvo sus particularidades en función del contexto que atravesaba Entre Ríos y de la dinámica de la movilización que le fue imprimiendo la Multisectorial. Al atraso salarial (que alcanzó los tres meses de sueldos adeudados) que afectaba a los agentes estatales y que, a su vez, ponían en cuestión su reproducción social, la grave situación de los deteriorados sistemas de salud y educación pública, y el empeoramiento general de las condiciones de vida de grandes capas de la población, se les sumó la “solución” que el gobierno entrerriano intentó para tratar de paliar la crisis: el pago en bonos de los haberes y jubilaciones (recurso ensayado, a su vez, en otras provincias). Al mismo tiempo, también se fraccionó el aguinaldo.

De esta manera, el rechazo a las medidas del déficit cero, a la implementación de los bonos y los pagos adeudados fueron las tres demandas principales que se articularon en las movilizaciones en Entre Ríos motorizadas por la Multisectorial, cuya beligerancia con el gobierno provincial como antagonista fue permanente e *in crescendo* durante el segundo semestre de 2001.

Los sujetos que se movilizaron para enfrentar estas medidas lo hicieron siempre muñidos de un importante grado de “organicidad”: fue la “matriz sindical” la que predominó en este proceso de lucha en la provincia. Los trabajadores, comerciantes, pequeños empresarios, estudiantes, etc., actuaron mediante sus organizaciones corporativas (sindicatos, agrupaciones y federaciones de comerciantes y empresarios, cen-

tros y federaciones estudiantiles). La fuerza social que se fue construyendo en la alianza de estos sectores en lucha contra un antagonista común (el Estado) se vio cristalizada en la Multisectorial. Esta organización, hegemonizada por los sindicatos de trabajadores estatales, y dirigida por ATE, mantuvo un estado de permanente movilización. Con respecto a las acciones llevadas a cabo durante el proceso, podemos establecer una distinción: cuando los trabajadores reclamaron cuestiones económico-corporativas específicas de su sector (además del pago de salarios, incentivo docente, partidas, etc.) lo hicieron mediante formas de lucha “clásicas”, como paros, retención de servicios y asambleas. Los gremios a su vez recurrieron a la declaración del estado de alerta y asamblea permanente. Cuando se articularon y movilizaron junto a otros sectores en la Multisectorial, además de la movilización callejera se desplegaron un abanico más amplio de acciones, como los cortes de calle con quema de cubiertas, escraches, acciones más creativas que apelaban a la teatralidad (quema de muñecos) y el humor (la elaboración de bonos “truchos”), se arrojaron proyectiles, e incluso, se produjeron algunos enfrentamientos. Es decir, muchas de las acciones de carácter más “novedoso” se canalizaron mediante la Multisectorial, que a su vez demostró, al actuar como una fuerza social, mayor radicalidad tanto en sus acciones como en sus discursos. En las localidades del interior de la provincia, en cambio, se registraron más cortes de ruta de docentes, municipales, productores agropecuarios y desocupados. Podemos hipotetizar que esto pudo deberse a cobrar un mayor grado de visibilidad de los conflictos en localidades más pequeñas con un grado de aislamiento mayor.

La implementación de los bonos federales para pagar los salarios y jubilaciones adeudadas contribuyó a producir una situación de anomia en la cual la desregulación social generada por la rápida pérdida del valor de estos (sea por su devaluación como directamente su no aceptación como medio de pago) dio lugar a una radicalización del proceso conflictivo y la agudización del antagonismo de los trabajadores con el Estado. La





dislocación de estas “reglas de juego” que norman las conductas sociales, en el marco de un contexto preñado de protestas y de ajuste permanente, dieron lugar, de manera análoga al proceso hiperinflacionario de 1989, a los primeros piquetes frente a supermercados de vecinos que demandaban alimentos en Paraná, como una prolepsis de lo que sucedería en diciembre, mes en el que se desató una ola de saqueos en la provincia. Estos profundos trastocamientos y estremecimientos políticos, económicos y sociales, característicos de las crisis orgánicas, en las cuales la clase dominante pierde su capacidad de dirigir a la sociedad (vale decir, al resto de las clases y fracciones de clases sociales) en su conjunto y de construir consensos en torno a su dominación, genera el sisma entre representados y representantes. Se produce una fractura, un quiebre en la cadena de mando propia de la relación de dominación y de la pura resistencia en tanto subalternos. La puesta en cuestión de la hegemonía abre la brecha para la irrupción de un proceso de subjetivación en clave antagonista de la fuerza social que pugna por modificar su situación subordinada en el marco de unas reglas de juego que perdieron vigencia para sostener la reproducción social de manera ordenada sin que las contradicciones sociales estallen en turbulencias sociales de mayores proporciones.

Bibliografía

Agmer (2001). Memoria 2001. Recuperado de http://agmer.org.ar/index/wp-content/uploads/2012/03/memoria_2001.pdf.

Aiziczon, F. (2021). “Antes, durante y después. Apuntes sobre Neuquén 2001”. *(En)clave Comahue. Revista Patagónica de Estudios Sociales* 27.

Auyero, J. (2007). *La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Barbeito, A. y Lo Vuolo, R. (1992). *La modernización excluyente*. Buenos Aires: Unicef-Ciepp-Losada.

Bonnet, A. (2015). *De la insurrección a la restauración. El kirchnerismo*. Buenos Aires: Prometeo.

Bonnet, A. y Piva, A. (2009). *Argentina en pedazos. Luchas sociales y*

conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad. Buenos Aires: Continente.

Cotarelo, M. C. (2016). *Argentina (1993-2010). El proceso de formación de una fuerza social*. Buenos Aires: Imago Mundi.

Durkheim, E. (1973). *La división del trabajo social*. Buenos Aires: Schapire.

Eskenazi, M. (2017). El espectro de la dolarización. Discutiendo las interpretaciones sobre las disputas interburguesas en el origen de la crisis de la convertibilidad. En Bonnet, A. y Piva, A. (2009). *Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad*. Buenos Aires: Continente.

Fradkin, R. (2002). *Cosecharás tu siembra. Notas sobre la rebelión popular argentina de diciembre de 2001*. Buenos Aires: Prometeo.

Gordillo, M. (2010). *Piquete y cacerola. El “argentinazo” del 2001*. Buenos Aires: Sudamericana.

Gutiérrez, F. y Ertola, F. (2021). “La crisis de 2001 en Río Negro. Protestas, ‘voto bronca’ y renunciadas comunales” en *(En)clave Comahue. Revista Patagónica de Estudios Sociales 27*.

Hintze, S. (2003). *Trueque y economía solidaria*. Buenos Aires: Prometeo.

Iñigo Carrera, N. (2018). De desocupados y superpoblación relativa. En Becher, P. y Pérez Alvarez, G. *Las organizaciones de trabajadores desocupados en la historia reciente de Argentina: experiencias, luchas y esperanzas (1990-2015)*. Bahía Blanca: Ceiso.

Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M.C. (2006). Génesis y desarrollo de la insurrección espontánea de diciembre de 2001 en Argentina. En Caetano, G. *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*. Buenos Aires: Clacso.

Marín, J. C. (2009). *Leyendo a Clausewitz*. Buenos Aires: Picaso.

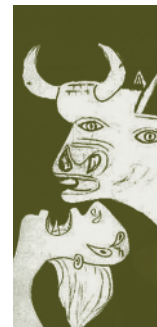
Marx, K. (2001). *El capital. Tomo I*. México: FCE.

Mayor, A. (2019). “Hambre, moral y rebelión. Los saqueos en Entre Ríos, en diciembre de 2001”. *Revista de Estudios Marítimos y Sociales 15*, pp. 212-231.

_____ (2022). “El ‘pueblazo’ entrerriano del 93. Una aproximación a la dinámica de la resistencia trabajadora al ajuste en Entre Ríos”. *Crítica y Resistencias 15*, pp. 1-20.

Modonesi, M. (2010). *Subalternidad, antagonismo, autonomía. Marxismo y subjetivación política*. Buenos Aires: Clacso-Prometeo.

Piva, A. (2009). Vecinos, piqueteros y sindicatos disidentes. La dinámica





del conflicto social entre 1989 y 2001. En Bonnet. A. y Piva. A. *Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad*. Buenos Aires: Continente.

Rodríguez, Schunk y Riegelhaupt, (2019). *Adónde va el excedente. Los noventa en un espacio subnacional*. Paraná: Eduner.

Román, M. (2010). Cacerolas, piquetes y clubes de trueque. Las expresiones de la rebelión popular de 2001 en el Chaco. Ponencia presentada en *XXX Encuentro de Geohistoria Regional. IIG-Conicet*. Resistencia (Chaco).

Salvia, S. (2007). Estado y conflicto interburgués en Argentina. La crisis de la convertibilidad 1999-2001. En Bonnet. A. y Piva. A. *Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad*. Buenos Aires: Continente.

Sartelli, E. (2007). *La plaza es nuestra. El Argentinazo a la luz de la lucha de la clase obrera en la Argentina del siglo XX*. Buenos Aires: Ediciones RyR.

Schuster et. al. (2005). *Tomar la Palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo.

Schvarzer, J. y Finkelstein, H. (2003). "Bonos, cuasimonedas y política económica". *Realidad Económica* 193.

Simmel, G. (2013). *Filosofía del dinero*. Madrid: Capitán Swing.

Zibechi, R. (2003). *Genealogía de la Revuelta*. Buenos Aires: Letra libre.

Zícarí, J. (2018). *Camino al colapso. Cómo llegamos los argentinos al 2001*. Buenos Aires: Continente.